

**AMPARO EN REVISIÓN 844/2018.
 MATERIA: ADMINISTRATIVA.
 QUEJOSO Y RECURRENTE:
 COMISARIADO DEL EJIDO *****,
 *****, MUNICIPIO DE LERDO
 DURANGO.**

Cotejó:

**MAGDO. PONENTE: MIGUEL NEGRETE GARCÍA.
 SECRETARIO: RAÚL ENRIQUE ROMERO BULNES.**

Torreón, Coahuila de Zaragoza.
 Acuerdo del Tercer Tribunal Colegiado en
 Materias Penal y Administrativa del Octavo
 Circuito, correspondiente al treinta de abril del
 dos mil diecinueve.

VISTO, para resolver en revisión, el
 juicio de amparo indirecto 397/2017, y,

A N T E C E D E N T E S.

PRIMERO. Datos generales.

Parte quejosa:

Nombre:	Comisariado del ejido *****, *****, municipio de Lerdo Durango.
Promueven:	***** *****, ***** y *****.

Demanda:

Fecha de presentación:	16 de marzo de 2017.
Lugar:	Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en la Laguna.
Juzgado de Distrito en la Laguna al que se turnó el asunto:	Juzgado Primero de Distrito en la Laguna.
Fecha de radicación de la demanda:	17 de marzo de 2017.

Actos reclamados y autoridades responsables:

Autoridad responsable:	<i>Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Sexto Distrito, con sede en Torreón, Coahuila.</i>
Actos reclamados:	<i>Se reclama de la autoridad responsable el acuerdo de radicación del juicio 1028/2016 de fecha quince de febrero del dos mil diecisiete, únicamente en aquella parte en la cual determina negar una medida precautoria al ejido que representamos, y también en aquella parte en la cual niega la personalidad a nuestro asesor para</i>

Seis, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza, precisada en el inciso a), del considerando segundo, por los motivos expuestos en el diverso cuarto de esta sentencia.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Ejido ** * de Municipio de Lerdo, Durango, respecto de la negativa señalada con el inciso b), del considerando segundo, reclamada a la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Seis, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza, por las razones asentadas en el apartado quinto de esta sentencia.**

PAUL ENRIQUE ROMERO BULNES
70168.68.20.83.8a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.83.97
2020-11-21 09:49:37

TERCERO. Trámite del recurso.

Recurrentes:	Integrantes del comisariado del Ejido **** * municipio de Lerdo Durango.
Fecha de interposición:	08 de enero de 2018.
Tribunal colegiado a que se turnó:	Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito.
Fecha que	09 de julio de 2018.

Penal y Administrativa del Octavo Circuito es competente para conocer del asunto.	
Fundamento:	Artículos 84 de la Ley de Amparo; 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 16/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
Supuesto fáctico:	La resolución fue dictada dentro de un expediente radicado en un Juzgado de Distrito, con residencia en la jurisdicción de este órgano colegiado.

SEGUNDO. Oportunidad.

Fecha y forma de notificación del fallo recurrido:	21 de diciembre de 2017, por lista (folio 281).
Fecha de presentación del recurso:	08 de enero de 2018.
Lapso contemplado en la ley:	10 días.
Fundamento:	Artículo 86 de la ley de

promovientes cuentan con legitimación:	
Motivo específico:	Por tener el carácter de quejoso y autoridad responsable en el juicio principal.

CUARTO. Innecesaria transcripción de agravios y resolución recurrida. No se transcriben los agravios, conforme a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que no existe precepto legal que así lo disponga.

Por identidad de razón, tampoco se inserta la determinación impugnada.

QUINTO. Decisión judicial. Los motivos de inconformidad resultan que nos ocupan resultan **fundados**, según se expondrá a continuación.

I. En el **segundo agravio** aducen los inconformes, que la jueza de Distrito sobreseyó indebidamente en relación con el acto reclamado consistente en la **negativa de reconocer las facultades del asesor** de la

Procuraduría Agraria, bajo el argumento de que se trata de un acto que no es de imposible reparación, al no afectar derechos sustantivos del poblado quejoso, y con apoyo en la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación número P./J.6/1991, identificada con el rubro de **PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.**

Pues, si bien es cierto que dicha tesis se refiere al tema de la personalidad, reflejando con claridad el punto a que se refiere el título de la misma, también lo es que ese criterio encuentra su **excepción en la materia agraria**, donde los aspectos de representación, asesoría y asistencia técnica, sí constituyen un derecho sustantivo en favor de los campesinos,

IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).

Pues en realidad la problemática correspondiente se ubica en los **derechos fundamentales** reconocidos en el artículo 27, fracción XIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto contempla que el Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta impartición de la **justicia agraria**, con objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, apoyando la **asesoría legal** de los campesinos; además de establecer un órgano para la **procuración** de dicha justicia.

De ahí que, este tribunal colegiado estime que en la especie el tema sometido al escrutinio constitucional, no se refiere al de personalidad que señaló el juez de Distrito en su sentencia, sino a los **derechos fundamentales** de asesoría legal para

extrañas al juicio...”, orientada, básicamente, a verificar la posibilidad de **reparación de las violaciones alegadas en la sentencia definitiva**; lo cual se complementó con diversos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación —Quinta, Sexta y Séptima Épocas—, en el sentido de que los actos correspondientes tuvieran una ejecución material e inmediata en la persona o en los bienes del agraviado, para lo cual habría de analizarse la naturaleza del acto, de las violaciones reclamadas, así como de la forma en que repercutían en el procedimiento, siempre que no se ubicaran en el catálogo de violaciones susceptibles de combatirse en el amparo directo, conforme al entonces artículo 159 de la ley de la materia, ahora equivalente al 172 de la norma reglamentaria vigente. ■

Mientras que en la reforma constitucional de 1951, el ordinal 107, fracción III, inciso b), contemplaba que en materia judicial, civil o penal y del trabajo, el amparo

Dicha hipótesis legal, de acuerdo con lo sostenido por el máximo intérprete de la constitución, al resolver la **contradicción de tesis 377/2013**, refleja la intención del creador de la norma de reiterar la excepcionalidad de la procedencia del amparo indirecto en contra de actos emitidos dentro de juicio, donde es necesario atender a la gravedad de la violación reclamada, la cual debe ser de tal magnitud que impida el ejercicio de un derecho y no solamente la lesión jurídica de prerrogativas de carácter formal o adjetivas, que no necesariamente llegarán a trascender al resultado del fallo, además de que debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos que no provengan exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables.

En conclusión, esta última concepción es la que debe tomarse en cuenta hoy en día, para definir cuando nos encontramos frente a actos que tengan el

Por tanto, dada la naturaleza de los actos de "**imposible reparación**" que se desprende de las invocadas normas constitucional y legal, es por lo que este órgano colegiado llega a la conclusión de que la jueza de Distrito indebidamente sobreseyó en el amparo, bajo el argumento de que los actos reclamados en el juicio no son de imposible reparación, al no afectar materialmente derechos sustantivos.

Debe quedar claro que la resolutoria partió de una premisa equivocada, al sostener que el acto reclamado consistente en la **negativa de reconocer las facultades del asesor de la Procuraduría Agraria**, quien defendía los intereses del ejido quejoso en el juicio agrario, era una cuestión procesal sobre personalidad que no era impugnabile en el amparo indirecto.

Ello, porque en el presente asunto se encuentran en juego los derechos fundamentales de asesoría legal para

se desprende que la Procuraduría mencionada, tiene a su cargo el ser garante de la defensa de los derechos de los ejidatarios, entre otros sujetos, a través de su representación en asuntos agrarios cuando estos tengan que desahogarse ante autoridades jurisdiccionales, teniendo atribuciones para llevar a cabo cualquier acto que resulte necesario para la adecuada defensa de la parte a quien representa, con el propósito de lograr que prosperen sus pretensiones.

De modo que, debe puntualizarse que el asesor agrario es un **auténtico representante** facultado para realizar dentro del juicio correspondiente todos los actos procesales que exija la adecuada defensa de los intereses de su asesorado.

De ahí que cualquier conclusión, como la sostenida por la autoridad responsable, que limite la actuación de los defensores en materia agraria a las funciones de orientar y coadyuvar a las partes en el juicio, resulte incorrecta al

enmendado desde luego a través del amparo indirecto.

Lo anterior, porque las violaciones procesales que se reservan para dirimirse en amparo directo, aplazan su decisión, ya que no pueden impugnarse sino, en su caso, hasta que recae la definitiva, independientemente de que con ello corren el riesgo de que ya no puedan ser reparadas constitucionalmente por los tribunales federales.

Se explica, quien obtiene sentencia definitiva favorable en el procedimiento natural, no puede promover juicio de amparo directo en su contra, para plantear la indebida aplicación o falta de aplicación de una norma legal en la resolución que decida sobre un aspecto procesal, de modo que si su contraparte obtiene un fallo favorable de amparo contra esa sentencia, la autoridad responsable con motivo del cumplimiento o ejecución del mismo, podrá dictar una sentencia donde, por un lado, no se haga cargo de aquella violación procesal

la institución procesal que está en juego, con los efectos jurídicos y trascendencia de lo resuelto y con los particulares efectos de la sentencia de amparo concesoria que llegara a emitirse, es que se concluye en la idoneidad de que en la demanda de amparo indirecto se planteen aspectos vinculados al desconocimiento o reconocimiento de las **facultades del asesor** de la Procuraduría Agraria.

Aunado a la circunstancia de que se dará seguridad y certeza jurídica a los contendientes en un proceso, y se evitará la tramitación de juicios que implicarían pérdida de tiempo, desperdicio de recursos económicos y causación de molestias innecesarias; incluso, el análisis constitucional de las resoluciones que decidan sobre un acto de esa naturaleza, cumplirá con la exigencia de una pronta administración de justicia, pues aun cuando el vicio que se atribuya al acto no exista, esta misma cuestión, saneada, ya no será motivo de estudio en el juicio de amparo directo que la

substituirlos en sus decisiones ni promover a nombre de aquél, pues de esa manera se limita su derecho de defensa.

Resulta **fundado el concepto de violación** sintetizado.

En efecto, de las fracciones XIX y XX del artículo 27 de la Constitución, se desprenden diversos conceptos relacionados al desarrollo rural integral, así como condiciones para una impartición expedita de la **justicia agraria** y el fortalecimiento de la seguridad jurídica en el campo.

En especial, de dicha fracción XIX se obtiene la finalidad de que el Estado establezca medidas para robustecer la **seguridad jurídica en el campo**, mediante la asesoría legal a los sujetos agrarios.

Por su parte, los numerales 135, 136 y 179 de la Ley Agraria disponen, en lo conducente, la facultad que tiene la clase campesina de comparecer asesorados a los

juicios de esa naturaleza, pudiendo serlo mediante personal de la Procuraduría Agraria, la que tiene por encomienda la defensa de sus derechos; y que en el caso de que una de las partes se encuentre asesorada y la otra no, de oficio, deben solicitarse a la citada procuraduría los servicios de un defensor o asesor.

Ahora bien, las atribuciones de que está investido tal asesor, no deben entenderse de manera limitativa a las enunciadas en las fracciones del citado precepto 136, para sostener que, en cuanto a la representación en juicio de los sujetos agrarios, sólo puede coadyuvar y representarlos en asuntos y ante autoridades agrarias, así como asesorarlos y representarlos en sus trámites y gestiones para obtener la regularización y titulación de sus derechos agrarios, ante las autoridades administrativas o judiciales que corresponda.

Es decir, no es factible considerar que sus facultades de representación se limiten a asuntos tramitados ante autoridades agrarias o

que, contrario a lo resuelto por la jueza de Distrito, en el caso sí se encuentra demostrado el derecho del ejido quejoso para obtener la medida precautoria solicitada en el juicio agrario de origen ***(...que las cosas se mantengan como en la actualidad respecto del bien controvertido y se ordene al demandado***

******** ***, se abstenga***

de perturbar a nuestro ejido y ejidatarios en el aprovechamiento del volumen que ampara el título de concesión número 07DGO112270/36AMGR05 sobre el pozo número 2619, o el que se haya derivado de los actos que se impugnan en esta instancia, absteniéndose de realizar actos relacionados con el desmantelamiento o cegamiento del pozo señalado.), pues en autos obran las documentales que justifican que éste fue beneficiado con el mencionado título de concesión, desde el quince de marzo de dos mil cinco, de modo que no era necesario acreditar con alguna prueba la posesión del agua correspondiente, pues ello implica el aprovechamiento de la misma.

ordenar por parte de las autoridades jurisdiccionales, al igual que de las de control constitucional, la práctica de cualesquier diligencia necesaria para el esclarecimiento de la verdad, en el caso concreto la demostración, mediante una sencilla inspección judicial, quien ostenta actualmente el aprovechamiento del agua, o bien solicitar un informe a la Comisión Nacional del Agua, para efecto de que informara la situación actual del pozo, como por ejemplo se advierte del oficio expedido por ésta, con posterioridad a la promoción del juicio de amparo, en el sentido de que el aprovechamiento subterráneo materia de controversia, se encuentra asignado al *****
***** *****, del Municipio de Lerdo Durango.

Los motivos de inconformidad sintetizados, devienen **parcialmente fundados.**

Primeramente, conviene señalar que en el caso no resultan aplicables los principios de **apariencia del buen derecho y peligro**

en la demora, que se invocan en los agravios.

Así es, sobre el particular el artículo 166 de la Ley Agraria dispone lo siguiente:

Artículo 166. Los tribunales agrarios proveerán las diligencias precautorias necesarias para proteger a los interesados. Asimismo, podrán acordar la suspensión del acto de autoridad en materia agraria que pudiere afectarlos, en tanto se resuelve en definitiva. La suspensión se regulará aplicando en lo conducente lo dispuesto por el libro primero, título segundo, capítulo III, de la Ley de Amparo.

En la aplicación de las disposiciones de ese ordenamiento para efectos de la suspensión del acto de autoridad en materia agraria, los tribunales agrarios considerarán las condiciones socioeconómicas de los interesados para el establecimiento de la garantía inherente a la reparación del daño e indemnización que pudiera causarse con la suspensión, si la sentencia no fuere favorable para el quejoso."

Del numeral transcrito se desprenden, en lo que interesa, **dos supuestos jurídicos diferentes:**

a. Las diligencias precautorias; y,

b. La suspensión de los actos de autoridad en materia agraria que sean impugnados en un juicio de la misma naturaleza.

En relación con las **medidas o providencias cautelares o precautorias**, éstas se identifican como los instrumentos que puede decretar el juzgador, a solicitud de las partes o de oficio, para conservar la materia del litigio, así como evitar un grave e irreparable daño a las mismas partes o a la sociedad con motivo de la tramitación del proceso.

En caso de que en un juicio agrario se solicite por alguna de las partes alguna **medida cautelar o precautoria**, considerando que la Ley Agraria no prevé su regulación, es necesario acudir a las disposiciones que sobre el particular establece el Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual puede ser aplicado supletoriamente, dado que así lo dispone de forma expresa el ordinal 167 de aquella ley.

ejido y en una supuesta asamblea de formalidades simples.

[...]

Es importante destacar que no obstante los actos y hechos indicados nuestro ejido a través de sus miembros continúa aprovechando hasta la fecha de manera normal el aprovechamiento subterráneo indicado.

[...]

Con fundamento en lo previsto en el artículo 166 de la Ley Agraria, a efecto de preservar la materia del juicio y evitar daños mayores a nuestro ejido, solicitamos como medida precautoria lo siguiente:

*Se determine que las cosas se mantengan como en la actualidad respecto del bien controvertido y se ordene al demandado ***** , se abstenga de perturbar a nuestro ejido y ejidatarios en el aprovechamiento del volumen que ampara el título de concesión número ***** sobre el pozo número ****, o el que se haya derivado de los actos que se impugnan en esta instancia, absteniéndose de realizar actos relacionados con el desmantelamiento o cegamiento del pozo señalado. (Folios 53, 55 y 56)*

El que suscribe, Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, hace constar que el presente asunto fue listado para su resolución el _____, para discutirse en sesión del _____; y que el engrose respectivo concluyó el _____. Doy fe.

El Secretario de Acuerdos:

Juan Pablo García Ledesma.

CERTIFICACIÓN

El suscrito Secretario **Raúl Enrique Romero Bulnes**, hago constar que el contenido del presente proyecto corresponde a las constancias existentes en autos. Conste.

Raúl Enrique Romero Bulnes.

AMPARO EN REVISIÓN 844/2018.

MAGDO. PONENTE: **MIGUEL NEGRETE GARCÍA.**

SECRETARIO: **RAÚL ENRIQUE ROMERO BULNES.**

PROPUESTA:

Temas:

1. La **negativa a reconocer las facultades del asesor** de la Procuraduría Agraria, es impugnable en el amparo indirecto, al afectar materialmente derechos sustantivos.
2. **Facultades del asesor** en el juicio agrario.

Evidencia Criptográfica – Transacción

Archivo Firmado: 29540000236386390003002.doc

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s):

Firmante	Nombre:	RAÚL ENRIQUE ROMERO BULNES	Validez:	OK	Vigente
Firma	# Serie:	706a6620636a66000000000000000000000000000008397	Revocación	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	16/05/2019T17:30:20Z / 16/05/2019T12:30:20-05:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	Sha256withRSA			
	Cadena de Firma:	a1 3d e7 1e 0c 09 d2 49 bd c2 df 1c 65 32 d3 1c e8 9e 22 16 16 c2 e5 06 32 6c 37 96 31 72 cf 6b 91 f0 33 64 f0 00 ca 7d 72 ca f3 cc 47 5b 96 a9 6b 8b 28 38 db 32 8e 0c ae 35 fd 0b 5a ea 71 19 a3 62 f9 d3 8f 27 b5 89 22 2a 77 2c 53 94 ef 8b b3 ff 4b 20 63 5b b7 17 07 98 c8 9e 95 56 37 84 17 c1 85 d7 3a 0c 5b 0e b2 6a dc 92 d4 f9 71 f4 80 e1 c8 12 87 66 b2 0f 45 e1 59 c1 5f 73 36 8e d9 8e 55 82 bc 58 44 5f e7 c6 82 ca 56 a4 4c 30 5f 55 06 81 44 69 17 36 00 02 48 09 b5 e7 97 b2 a2 86 ca ce 83 48 1d 94 9f c3 b2 cb 53 11 7c b5 8e 2a 73 d9 70 8b 15 41 79 b3 e4 db 26 82 af 65 08 bf 46 7a 1f 5c 8c da 0f 20 04 5c 7c 9a 3c 3f 7a 6f 62 04 b4 61 a2 f5 72 5e 06 ab fb 84 80 1a 04 ca a8 65 f3 57 4d ea 04 bd 3d ed 88 ab f3 8d 87 1f 94 6f da 3b 2b cd 68 50 19 1d 55 e3 bb 17			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	16/05/2019T17:30:20Z / 16/05/2019T12:30:20-05:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02			

Archivo firmado por: RAÚL ENRIQUE ROMERO BULNES
 Serie: 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.83.97
 Fecha de firma: 16/05/2019T17:30:20Z / 16/05/2019T12:30:20-05:00
 Certificado vigente de: 2017-11-22 09:49:37 a: 2020-11-21 09:49:37

El dieciseis de mayo de dos mil diecinueve, el licenciado Raúl Enrique Romero Bulnes, Secretario de Tribunal, con adscripción en el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, hago constar y certifico que en esta versión pública no existe información clasificada como confidencial o reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Conste.

PJF - Versión Pública